

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	CARLOS OVIDIO VILLEGAS MORALES
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado Catorce Laboral
RADICADO	05001 3105 014 2018 00522 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 276 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Reliquidación con sumatoria de tiempos y cotizaciones – monto superior al aplicado- intereses o indexación
DECISIÓN	Revoca intereses moratorios en lo demás Confirma sentencia

En la fecha, **dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de **Colpensiones, y grado jurisdiccional de consulta para la misma entidad**, contra la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Carlos Ovidio Villegas Morales**. Código radicado único nacional 05001 3105 **014 2018 00522 01**.

La Magistrada ponente, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del año en curso, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado en sala virtual mediante acta N°. **38**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación.

Antecedentes

El demandante convocó a juicio a la accionada pretendiendo se condene al reajuste de su pensión a partir del 20 de octubre de 2013, teniendo en cuenta un monto porcentual del 72% por tener 967 semanas, conforme a lo establecido en el Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año, más los intereses moratorios o subsidiariamente la indexación, y las costas del proceso.

En sustento de ello indicó que nació el 5 de mayo de 1.947; que se presentó ante el ISS hoy, COLPENSIONES a solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por reunir los requisitos exigidos para adquirir dicha prestación; que por medio de la Resolución No. 000277 el otrora ISS, le reconoció el derecho con base en el Decreto 758 de 1990 al ser beneficiario del régimen de transición, liquidándolo sobre un total de 612 semanas cotizadas y un ingreso base de liquidación de \$986.732,00 al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 51%, que arrojó una pensión de \$503,233.00.

Agrega que laboró al servicio del municipio de Bello, por el periodo comprendido entre el 18 de enero de 1989 al 1 de mayo de 2005, y durante el tiempo comprendido entre el 18 de enero de 1989 al 31 de julio de 1995, no se realizaron aportes, pues dicho lapso estuvo a cargo de dicho ente territorial; que por no estar de acuerdo con las semanas tenidas en cuenta en la liquidación de su pensión de vejez, el 20 de octubre de 2016 y el 07 de marzo de 2017, solicitó ante Colpensiones la reliquidación con la inclusión de todas las semanas laboradas, para aumentar su tasa de reemplazo del 72%; que Colpensiones a través de la Resolución No GNR 24938 del 20 de enero de 2017, manifestó que el interesado acreditaba un total de 6.772 días laborados correspondientes a 967 semanas, que realizada la liquidación se estableció un IBL de 1.191.511.00 al cual se le aplicó una tasa de reemplazo de 51%, arrojando una pensión de **\$607,670.00**, manifestando que no era posible incluir las semanas no laboradas y no cotizadas por el municipio de Bello,

posteriormente con Resolución No SUB 55251 del 09 de mayo de 2017, la entidad, negó nuevamente la reliquidación solicitada.

Mediante proveído del 30 de agosto de 2018, se admitió la demanda.

Notificada la accionada oportunamente, a través de apoderada judicial, **dio respuesta** manifestando frente a los supuestos facticos, aceptar el contenido de los actos administrativos referidos, precisando que no existe una obligación a cargo de su representada, en la medida que no hay un soporte fáctico y legal, máxime que Colpensiones debe velar por la estabilidad financiera del sistema, no pudiendo por tanto hacer reconocimientos sin el lleno de los requisitos. **Se opuso a las pretensiones** y formuló **las excepciones** de fondo que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer y pagar reliquidación de pensión de vejez y su retroactivo, ausencia de causa para pedir o petición en abstracto, buena fe de Colpensiones inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios e indexación, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

La primera instancia terminó el 18 de noviembre del año en curso, con **sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín**, en la que **DECLARO** que al demandante le asiste derecho al reajuste de la pensión de vejez reconocida por Colpensiones, como consecuencia de la reliquidación de la mesada, teniendo en cuenta para el efecto el cómputo de los tiempos públicos no cotizados al ISS, desde el 20 de octubre de 2013, de conformidad con la jurisprudencia reciente y reiterada a partir de la sentencia CSJ SL1981-2020. En consecuencia, **condenó** a Colpensiones a reconocer y pagar en favor del señor Carlos Ovidio Villegas Morales, el retroactivo correspondiente al reajuste de la pensión de vejez, desde el 20 de octubre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2022, por la suma \$12.143.949.00, 14 mesadas, al haberse causado la prestación antes del 31 de julio de 2011 conforme al acto legislativo 01 de 2005, autorizando realizar el respectivo descuento para los aporte en salud. Dispuso que a partir del 01 de diciembre de

2022, la entidad demandada deberá continuar pagando como mesada pensional un valor de \$1.026.395.00, sin perjuicio de los incrementos legales anuales.

Así mismo condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en relación con los reajustes ordenados por la suma de \$12.143.949, a partir 20 de febrero de 2017, hasta el momento en el que se efectúe el pago de lo adeudado.

Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de las diferencias causadas con anterioridad al 20 de octubre de 2013, y las demás excepciones de mérito planteadas infundadas.

Como argumentos de la decisión indicó que, según el precedente actual de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, era viable reliquidar la pensión de vejez teniendo en cuenta todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador -público o privado-, en los términos del Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año, al ser beneficiario del régimen de transición y cumplir todos los requisitos para el efecto, por lo que recalculó la prestación teniendo en cuenta el IBL reconocido por la accionada, al no haber sido objeto de debate, aplicando una tasa de reemplazo del 72% al acreditar la densidad de semanas para llegar hasta ese tope, conforme lo dispone el artículo 20 del Decreto 758 de 1990.

En cuanto a los intereses moratorios deprecados adujo ser procedentes conforme a lo dispuesto en la providencia SL3130-2020.

La apoderada de la demandada interpuso oportunamente el recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la sentencia primigenia bajo el argumento de no ser viable la aplicación de una tasa de reemplazo del 72% teniendo en cuenta la sumatoria de semanas efectivamente cotizadas, con tiempos públicos no cotizados, pues conforme a la jurisprudencia para las reliquidaciones solo era procedente en virtud del acuerdo 049 de 1990 tener en

cuenta las semanas exclusivamente cotizadas al ISS hoy Colpensiones en la medida que en el citado Acuerdo no existe una disposición que permita adicionar tiempos no cotizados como si acontece a partir de la ley 100 de 1993 o como ocurre con las pensiones de jubilación establecidas en la Ley 71 de 1988.

En lo no apelado se conoce también en grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, en los términos del artículo 69 del C. P. T. y de la S.S.

De la oportunidad **para presentar alegatos hizo uso la apoderada judicial del demandante** quien solicitó confirmar íntegramente la decisión de primera instancia en la medida que la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta la sumatoria de tiempos públicos es procedente conforme a la actual tesis esbozada por la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Como hechos debidamente acreditados en los autos se tienen: la fecha de nacimiento del demandante **05 de mayo de 1947**, la afiliación al sistema pensional el 12º de septiembre de 1988, cotizando para el entonces ISS hoy COLPENSIONES un total de **631,29 semanas**, y **336,29 semanas** correspondientes al tiempo laborado no cotizado con el Municipio de Bello entre el 18 de enero de 1989 y el 31 de julio de 1995, para **un total de 967,58 semanas** (historia laboral y certificado de tiempos laborados Municipio de Medellín. Archivo 03.2018-00522 Expediente. PDF págs 43-60); que el actor solicitó el reconocimiento y pago de pensión de vejez, la que fue concedida mediante la Resolución 000277 del 27 de enero del 2009 en virtud del régimen de transición, aplicándole el Decreto 758 de 1990, teniéndole en cuenta **612 semanas** y un IBL de \$986.732.00, **al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 51%, para una mesada de \$503.233.00 para el año 2008**, (Archivo 03.2018-00522 Expediente. PDF págs 9-12);

que a través de acto administrativo GNR256632 del 11 de octubre de 2013 se reliquidó la prestación estableciendo una mesada pensional de \$543.041.00 a partir del 16 de septiembre de 2009; que el 20 de octubre de 2016, el actor solicitó la reliquidación de su pensión para que se le aplicara un monto del 72%, petición que fue resuelta mediante Resolución GNR 24938 del 20 de enero del 2017 liquidando su IBL en un valor de **\$1.191.511.00**, pero negando la aplicación de un monto superior, concluyendo que la mesada arrojaba un monto inferior al mínimo legal que venía recibiendo, por lo cual se dejaba incólume (Archivo 03.2018-00522 Expediente. PDF págs 23-32); que el 7 de marzo del año 2017, el pensionado presentó nueva petición solicitando la reliquidación, negada mediante la Resolución SUB55251 del 9 de mayo de 2017.

Atendiendo a la inconformidad planteada por Colpensiones y el grado jurisdiccional de Consulta, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar o no a la reliquidación dispuesta por la primera instancia, computando las cotizaciones directas al ISS, con las de servicio público sin aportes, en los términos del Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año a efectos de aumentar la tasa de reemplazo que se aplica al IBL reconocido por Colpensiones. En caso afirmativo se analizará la procedencia o no de los intereses moratorios y si la liquidación efectuada por el juzgado es correcta, así como lo relativo a la condena en costas.

Frente a la **reliquidación de mesada** contabilizándose para el efecto los tiempos de servicio público sin cotización, debidamente acreditados, incluidos dentro de la relación efectuada en los actos administrativos por medio de los cuales se concedió la prestación y se formalizó su recalcuro, pero sin tenerse en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es evidente, que en atención a la tesis actual de la jurisprudencia especializada, hay lugar a ello, pues como se anunciara por el órgano de cierre de esta jurisdicción en sentencia SL1947-2020:

"... ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

Rectificación jurisprudencial frente a la que en sentencia SL1981-2020, se precisó:

(i) El sistema de seguridad social, inspirado en el principio de universalidad y el trabajo como referente de construcción de la pensión, reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.

(ii) En tal dirección, el literal f) del artículo 13 refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el lapso laborado.

(iii) Los beneficiarios del régimen de transición, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas laboradas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS, hoy Colpensiones.

(iv) Esta regla de cardinal importancia la resaltó el legislador en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a entidades de previsión social o al ISS.

(v) Para darle viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios regulan extensamente todo un régimen financiación de las prestaciones a través de cuotas partes y títulos pensionales.

Y en la SL2557-2020, en la que se analizó asunto análogo al que aquí se estudia, se concluyó:

*..., conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento. De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, **esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante.** Así las cosas, la recurrente tiene la razón en cuanto afirma que tiene derecho a la reliquidación reclamada porque el régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990 es más*

favorable que aquel con el que la entidad de seguridad social accionada reconoció la pensión.

Posición que desde ese entonces ha sido pacífica y reiterada como se lee entre otras en sentencias SL2192, SL2776, SL2283 de 2021 y SL599-2022.

Así, conforme a la jurisprudencia antes reseñada y al no ser objeto de discusión que el actor es beneficiario del régimen de transición, tal y como lo acepta la entidad demandada, y estando demostrado que cuenta con 631,29, semanas cotizadas directamente al ISS hoy Colpensiones y 336,29 por servicios en el sector público sin cotización, contabiliza un total de **957,58**, es viable la aplicación de los reglamentos del ISS (Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758), y en esa medida, una tasa de reemplazo del 72%, y no de 51% como lo señaló la entidad accionada, pues conforme al parágrafo 2º del artículo 20 del Decreto referido¹, el porcentaje del 72% corresponde a las pensiones con 950 semanas y en este evento se acreditó que la pensionada cotizó 967,58, luego según la tabla de la disposición referida, se debe aplicar el 72% asignado como tasa de reemplazo para aquella personas que acrediten entre 950 y 999 semanas, **debiéndose entonces confirmar en este aspecto la decisión primigenia.**

Ahora, precisamente atendiendo al grado jurisdiccional de Consulta procede la Sala a realizar la respectiva reliquidación, advirtiendo en primer término que

¹ Parágrafo 2º La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este artículo, se sujetará a la siguiente tabla:
PORCENTAJE DE PENSION SOBRE SALARIO MENSUAL DE BASE

Número semanas	% Inv. P. total	% Inv. P. absoluta	% Gran Inv.	Vejez
500	45	51	57	45
550	48	54	60	48
600	51	57	63	51
650	54	60	66	54
700	57	63	69	57
750	60	66	72	60
800	63	69	75	63
850	66	72	78	66
900	69	75	81	69
950	72	78	84	72
1.000	75	81	87	75
1.050	78	84	90	78
1.100	81	87	90	81
1.150	84	90	90	84
1.200	87	90	90	87
1.250 o más	90	90	90	90

efectivamente operó el fenómeno prescriptivo sobre las diferencias causadas hasta septiembre de 2013, al formularse reclamación a la entidad demandada el 20 de octubre de 2016, la Resolución que confirmó la negación de la solicitud se notificó el 26 de enero de 2017 y la demanda se presentó el 23 de agosto de 2018, por lo que el término prescriptivo de los tres años que se consagra para las acciones que emanen de las leyes sociales, en aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 488 del C.S.T. afecta las citadas mensualidades, ello por cuanto, por regla general las pensiones se **pagan por mensualidades vencidas**, en virtud de lo estatuido en el artículo 35 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al presente asunto a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 (ver al respecto sentencia SL1011-2021). Ahora, la primera instancia señaló que se encontraban prescritas las mesadas anteriores el 20 de octubre de 2013, no obstante como este aspecto no fue objetado, habrá de **confirmarse la decisión** en virtud al grado jurisdiccional de consulta en que se examina el asunto.

Al realizar el cálculo del valor adeudado se obtiene una suma superior a la fijada en primera instancia:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2013	1,94%	\$ 589.500	\$ 719.027	\$ 129.527	3,3	\$ 427.439
2014	3,66%	\$ 616.000	\$ 732.976	\$ 116.976	14	\$ 1.637.666
2015	6,77%	\$ 644.350	\$ 759.803	\$ 115.453	14	\$ 1.616.343
2016	5,75%	\$ 689.454	\$ 811.242	\$ 121.788	14	\$ 1.705.028
2017	4,09%	\$ 737.717	\$ 857.888	\$ 120.171	14	\$ 1.682.394
2018	3,18%	\$ 781.242	\$ 892.976	\$ 111.734	14	\$ 1.564.271
2019	3,80%	\$ 828.116	\$ 921.372	\$ 93.256	14	\$ 1.305.587
2020	1,61%	\$ 877.803	\$ 956.384	\$ 78.581	14	\$ 1.100.139
2021	5,62%	\$ 908.526	\$ 971.782	\$ 63.256	14	\$ 885.586
2022		\$ 1.000.000	\$ 1.026.396	\$ 26.396	14	\$ 369.549
					TOTAL	\$ 12.294.002

No obstante, **al no haber sido objeto de reparo por el demandante** y estarse examinando el punto en el grado de Consulta a favor de Colpensiones, **habrá de confirmarse el valor condenado**, contando los descuentos para salud con sustento legal, reglamentario y jurisprudencial.

Frente a los intereses moratorios, ha de decirse que al tenor de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, estos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, por lo que inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender la buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trata simplemente del resarcimiento económico, y a pesar de admitirse actualmente incluso para reajustes, debe tenerse en cuenta que tal posición fue morigerada desde de la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para considerar que dichos intereses no son procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tengan respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas, que es justamente lo que aquí acontece, razón por la que no hay lugar a su imposición; y es que si bien al demandante le resultaba aplicable el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que como se dijo era beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto era que, esa normativa no permitía tener en cuenta tiempos públicos que no fueron cotizados al ISS, tal y como se interpretaba de lo establecido en el literal b) del artículo 12, "b) Un mínimo de quinientas (500) semanas **de cotización pagadas** durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) **semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo**", y del artículo 13 del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del acuerdo referido, cuando a la letra reza: "La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos ... Para su liquidación se tendrá en cuenta **hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo**", razonamiento este que soportó en diferente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia vigente para la época, línea de pensamiento de esa corporación que estuvo asentada por

varios años, en el entendido de que no era posible sumar los tiempos públicos no aportados al ISS con las cotizaciones efectivamente sufragadas al régimen de prima media administrado hoy por Colpensiones, a efectos de acceder al reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, **luego actuó conforme a las disposiciones normativas y jurisprudenciales vigentes para el momento de su decisión**, sin que pueda afirmarse que desatendió lo dispuesto en la sentencia SU 769 de 2014 y SU-057 de 2018 en las que la Corte Constitucional adujo que para el efecto del reconocimiento de prestaciones de vejez (pensiones en las que haya lugar a la aplicación del régimen de transición) era posible acumular los tiempos de servicio en el sector público -ya fueran a las cajas o fondos de previsión social- y las semanas cotizadas al ISS, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trataba de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990, pues en este evento la entidad estaba decidiendo un tema de reliquidación pensional y no el otorgamiento del derecho como tal, y dicho antecedente jurisprudencial constitucional, como lo sostuvo esta Sala de Decisión Laboral, no opera para el reajuste de mesadas pensionales, si no para el reconocimiento de la prestación como tal, ante la ausencia de satisfacción de requisitos de las normas anteriores, según la lectura jurisprudencial que venía haciéndose de ellas, así como de los requisitos contemplados en el art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art.9 de la Ley 797 de 2003, por lo cual, la entidad de manera justificada negó la reliquidación en su momento atendiendo a su postura proveniente de la aplicación minuciosa de la ley.

Igualmente debe aclararse que si bien, como se indicó inicialmente los intereses son procedentes para reajustes, tal como se señaló entre otras, en la sentencia SL3130 de 2020 mencionada por el juez de la causa, en la que se reitera el nuevo criterio planteado en la sentencia SL1681 del mismo año, tendiente a que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, otorgando en aquel caso tal concepto para una reliquidación pensional reconocida bajo la égida de la Ley 71 de 1988, ello no quiere decir, que el órgano de cierre haya cambiado su postura respecto a que en este tipo de asuntos, en los que la entidad niega el derecho atendiendo al ordenamiento legal vigente, distintos al allí planteado,

deban reconocerse, y es que nótese como en la decisión que refiere el juez de la causa claramente se advierte:

"Ahora bien, la posición que se sienta a través de esta decisión y que se justifica en líneas anteriores merece dos precisiones fundamentales.

*En primer lugar, que permanece vigente la jurisprudencia de la Corte en torno al carácter meramente resarcitorio de los intereses, mas no sancionatorio, de manera que no es necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe. **Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas.**"*

Posición que igualmente se aplica en la sentencia **SL2283 del 1 de junio del año 2021**, en la que, sí en un caso similar al aquí planteado, la Corte, luego de casar la decisión del *Ad quem*, en lo que se refirió a la negativa de la reliquidación pensional reclamada en virtud de la acumulación de tiempos públicos y privados, sobre el reconocimiento de la pensión de vejez al tenor del Acuerdo 049 de 1990, en sede de instancia, después de reliquidar la mesada pensional, **frente a los intereses moratorios señaló:**

*"Finalmente, en lo que tiene que ver con los intereses moratorios reclamados por el demandante, con fundamento en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, **debe señalarse que esta pretensión no está llamada a prosperar, ya que como quedó visto, el incremento de la tasa de reemplazo y el reajuste de la mesada pensional, se produjo en virtud de un cambio de jurisprudencia desarrollado por esta corporación, al admitirse la sumatoria de tiempos públicos con semanas cotizadas al ISS, a la luz del Acuerdo 049 de 1990, por lo tanto, no se accederá a dicha súplica** (CSJ SL1947-2020)." (resalto fuera del texto).*

En ese orden de ideas, **habrá de revocarse la condena por intereses moratorios, y en su lugar se concederá la indexación**, en la medida que lo adeudado ha perdido su poder adquisitivo, por el fenómeno inflacionario, debiendo actualizarse, ello con sustento en el artículo 53 de la Constitución Política y en criterios de justicia y equidad, pues no se puede admitir pago

liberatorio en relación con una suma cuyo valor se ha envilecido por el transcurso del tiempo.

Finalmente en relación a la imposición de costas en primera instancia a cargo de Colpensiones, es del caso señalar que aquella condena es una simple consecuencia procesal del ejercicio de la acción o de la excepción, y se traduce en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019), **luego se confirmará dicho aspecto.**

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones, a quien se desata adversamente el recurso interpuesto. Las agencias en derecho a favor del demandante se fijan en la suma de **\$1.000.000,oo.**

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **revoca el numeral tercero** de la parte resolutive de la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito Medellín dentro del proceso ordinario promovido por **Carlos Ovidio Villegas Morales** en contra de **Colpensiones**, en cuanto a la condena por intereses moratorios y en su lugar, **ordenar** a Colpensiones **indexar las mesadas adeudadas**, en la medida que han perdido su poder adquisitivo, por el fenómeno inflacionario. En lo demás **se confirma.**

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones, a quien se desata adversamente el recurso interpuesto. Las agencias en derecho a favor del demandante se fijan en la suma de **\$1.000.000,oo.**

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijará por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado